

ACUERDO POR EL QUE SE INADMITE EL CONFLICTO DE ACCESO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERPUESTO POR UN PARTICULAR FRENTE A ELECTRICIDAD PASTOR, S.L., (C.A.T.R. 25/2008) RELATIVO A DOS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE LAS CUBIERTAS DE SENDAS VIVIENDAS, DE 10 KW CADA UNA, SITUADAS EN CANTORIA (ALMERÍA).

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- El 5 de marzo de 2008 UN PARTICULAR presentó por correo administrativo un escrito, fechado el mismo día, que se registró en la CNE el 10 de marzo siguiente, mediante el cual interpuso conflicto de acceso frente a ELECTRICIDAD PASTOR, S.L.

Previamente, con fecha 3 de diciembre de 2007, EL PARTICULAR había solicitado acceso para la evacuación de las instalaciones objeto de conflicto a ELECTRICIDAD PASTOR, S.L. La distribuidora remitió contestación a la solicitud -sin que conste fecha de la misma- solicitando, por una parte, datos técnicos de las instalaciones, y por otra parte, un importe para los gastos del estudio de viabilidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley del Sector Eléctrico.

El 6 de julio de 2007 entró en vigor la Ley 17/2007, de 4 de julio. Dicha norma es aplicable a la solicitud de D EL PARTICULAR, la cual se efectuó el 3 de diciembre de 2007.

La Ley 17/2007 ha dado nueva redacción al artículo 42.2 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. En su nueva redacción, dicho artículo dispone: “*Para poder solicitar el acceso a las redes de distribución se habrá de **disponer previamente de punto de conexión** en las condiciones técnicas establecidas reglamentariamente.*” Y el párrafo segundo de ese apartado añade: “*En aquellos casos en que se susciten discrepancias en relación con las condiciones de conexión a las redes de distribución resolverá el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente*”.

El tenor del artículo 42.2 es claro en cuanto al mandato que dispone. La Ley prohíbe claramente (“*in claris, non fit interpretatio*”) que, después de su entrada en vigor, se pueda solicitar el acceso a redes de distribución sin que se disponga de punto de conexión. De acuerdo con este precepto, las condiciones técnicas de la conexión se van a definir reglamentariamente; esa concreción reglamentaria de las condiciones de conexión permitiría precisar la actuación de los distribuidores en esta materia así como el contenido de la supervisión en que consiste la competencia autonómica en este ámbito.

La exigencia de disponibilidad previa de un punto de conexión al objeto de poder solicitar el acceso viene establecida ya en la Ley, que también establece la competencia autonómica para resolver los conflictos sobre las condiciones de conexión a redes de distribución. Esos aspectos no serán objeto de desarrollo reglamentario. Este desarrollo se efectuará, meramente, en relación con la previsión de condiciones técnicas relativas a la concesión de un punto de conexión.

Así pues, la competencia para resolver conflictos de conexión a la red de distribución es autonómica (y, además, la resolución de las discrepancias sobre las condiciones de conexión ha de ser previa al planteamiento de una solicitud de acceso). Evidentemente, como aclara el Tribunal Supremo en la Sentencia de 5 de junio de 2007 (Sala C-A; Sección 3ª; recurso de casación 6453/2004) citada, la resolución de discrepancias de conexión que compete a la Comunidad Autónoma ha de producirse sobre los aspectos en que consiste su

competencia (los relativos a las instalaciones y sus condiciones técnicas), sin invasión de la competencia estatal sobre acceso (relativa a la energía que pueda circular por la red en función de la existencia, o no, de capacidad), pues, en otro caso, tales resoluciones podrán ser anuladas por los Tribunales: *“... reconocer la competencia de la Administración de la Generalidad Valenciana para autorizar y aprobar los proyectos de instalaciones de distribución de energía eléctrica a dos sectores de la urbanización de Canet d'En Berenguer, por su carácter intracomunitario, rechazando que con base jurídica en este título competencial, pueda imponer condiciones que no tengan por objeto garantizar el cumplimiento de los requisitos y condiciones técnicas de las instalaciones, que se revelen incompatibles por producir como resultado una restricción injustificada del derecho de acceso a la red de distribución.”*

SEGUNDO.- Sobre la falta de conexión previa del solicitante.

Resulta primordial en este caso, al que es aplicable el artículo 42 de la Ley del Sector Eléctrico en redacción de la Ley 17/2007, analizar si el conflicto se ajusta a los términos del artículo citado (*“Para poder solicitar el acceso a las redes de distribución se habrá de disponer previamente de punto de conexión”*).

Dado que para solicitar el acceso se ha de disponer de previa conexión, con respecto al acceso, rige el artículo 60.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre: *“Las limitaciones de acceso para los productores se resolverán sobre la base de la inexistencia de reserva de capacidad de red, sin que la precedencia temporal en la conexión implique una consecuente preferencia de acceso”*.

Es decir, la capacidad de la red habrá de ventilarse una vez estén pacíficas las condiciones de conexión (bien porque hayan sido aceptadas por el solicitante, bien porque la Administración autonómica haya resuelto el conflicto con relación a las mismas).

Si una vez concedido el punto de conexión el vertido de energía por parte de las instalaciones fotovoltaicas (acceso a la red) se viera sometido a condiciones o límites –coyunturales o generales- por la empresa distribuidora (*“limitaciones de acceso”*) con los que el generador no estuviera conforme, se podrá acudir a esta Comisión, quien resolverá el conflicto con base en el artículo 42.4 de la Ley del Sector Eléctrico (*“En aquellos casos en que se susciten conflictos en relación con el procedimiento de acceso a la red, dichos conflictos se someterán a la resolución de la Comisión Nacional de Energía”*).

EL PARTICULAR no ha acreditado que las instalaciones sobre las que se plantea conflicto de acceso dispongan de conexión, evidenciándose lo anterior de la documentación aportada.

TERCERO.- Sobre las cantidades exigidas al objeto de hacer el estudio de viabilidad.

Junto a su solicitud de resolución de conflicto, EL PARTICULAR solicitó que se le eximiese de aportar la cantidad de 4.000 euros solicitada por Electricidad Pastor para realizar el estudio de viabilidad de las dos instalaciones.

Esta Comisión carece de competencia para ordenar a la distribuidora la supresión de dicha exigencia, que, en su caso, habrá de ser acordada por la Jurisdicción ordinaria.

Ello, no obstante, ya ha manifestado en diversas ocasiones esta Comisión su opinión acerca de la improcedencia del cobro de cantidades por parte de la distribuidora por razón de la realización del estudio de viabilidad de acceso¹.

¹ Ver, entre otras, Resolución de la CNE de 7 de febrero de 2007 recaída en el CATR 16/2006 y Resolución de la CNE de 22 de marzo de 2007 recaída en el C.A.T.R 20/2006, cuyo contenido se puede consultar en la web de esta Comisión (www.cne.es).

A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración, en su sesión del día 8 de mayo de 2008, acuerda:

INADMITIR el conflicto presentado por EL PARTICULAR contra ELECTRICIDAD PASTOR, S.L., con relación a dos instalaciones fotovoltaicas sobre las cubiertas de sendas viviendas, de 10 kW cada una, situadas en Cantoria (Almería).

Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada ante el Ministro de Industria Turismo y Comercio, en el plazo de un mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación de el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Undécima, Tercero 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos.